

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 28 .- .-

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 25° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-7849-2024
CARATULADO	: MADRID/FISCO DE CHILE _ HOSPITAL DE
CARABINEROS	

Santiago, doce de diciembre de dos mil veinticuatro

### VISTOS:

A folio 1, comparecieron don **ALBERTO ESPINOZA PINO** y doña **MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN**, abogados, domiciliados en Luis Thayer Ojeda 1737, depto. 32, comuna de Providencia, Región Metropolitana, y Simón Bolívar 8800, comuna de La Reina, Región Metropolitana, respectivamente, en representación de don **JORGE ALEJANDRO MADRID VALENZUELA**, profesor, domiciliado en Ricardo Lyon 3530, depto. 106, comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, quienes, en la representación investida, dedujeron en juicio de hacienda una acción de indemnización de perjuicios en contra del **FISCO DE CHILE**, representado legalmente por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don **RAÚL SERGIO LETELIER WARTENBERG**, abogado, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1225, 4° piso, comuna de Santiago, Región Metropolitana, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que se reproducen a continuación.

Señalaron, que don **JORGE ALEJANDRO MADRID VALENZUELA** tenía 22 años para el 11 de septiembre de 1973, era dirigente estudiantil, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile de Antofagasta, y una de las miles de víctimas, objeto de torturas, tratos crueles, detención y prisión política; fue reconocido como víctima por la Comisión Nacional sobre Prisión



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

Política y Tortura, establecida por el Decreto Supremo N° 1.040, de 2003, bajo el numeral 13.715.

Expusieron el relato realizado directamente por el demandante:

*“Luego del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 se inició en la ciudad de Antofagasta una persecución a todos los dirigentes sociales pues ya se había activado la operación peineta (revisar casa por casa) desde el norte hacia el sur.*

*Coincidentemente fui llamado en un bando militar los días 13 y 14 hasta que el día 16 de septiembre de 1973, según información que escuchaba, me presento en forma voluntaria a Investigaciones.*

*Ese día junto a un profesor de la universidad nos presentamos en Investigaciones.*

*Damos nuestros nombres a un oficial (deduzco que es un oficial con grado por su apariencia física de persona mayor y por su vestimenta, ya que no sabía distinguir los grados por las estrellas que portan).*

*Me ofreció asiento y me preguntó si yo sabía algo de armas o dinero.*

*Le dije que en mi calidad de presidente de la federación los recursos de que disponíamos eran de conocimiento público y que su uso era gastos en asuntos propios de la federación. Me dijo que me podía ir a mi casa. Yo les mencione que vivía en una pensión a lo que me dijo que permaneciera allí.*

*Yo entendí esto último como una detención domiciliaria. Y así fue, porque a poco llegar mi casa - estaba a cinco cuadras, en calle Baquedano - se estaciona frente a la casa una camioneta de color rojo, alrededor de las 9 de la noche, ya oscureciendo; acto seguido, golpean la puerta y a todos los que nos encontrábamos allí nos*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

*formaron en el patio, nos solicitaron los nombres y revisaron nuestro dormitorio.*

*Eran detectives y de muy buen trato, dijeron que solo venían a buscarme a mí.*

*Me toman de los brazos y me dicen “tráete algo, porque esto va para largo”.*

*Me puse la chaqueta, me llevan al vehículo y me tiran acostado a la parte de atrás, junto a un detective que me apunta con la pistola durante todo el trayecto.*

*Llegando a las dependencias de Investigaciones, el trato amistoso cambió radicalmente.*

*Este cambio se tradujo en que en cuanto los detectives me entregaron a un oficial de militares, este le ordenó a un soldado, quien me arrojó abruptamente a la muralla, que si yo me movía me disparara inmediatamente; este joven soldado debía mantener su fusil recargado en mis pulmones, quien temblaba de miedo, pues yo sentía a través del fusil sus vibraciones de susto, ya que no podía sostener bien el cañón, lo que se traducía en un peligro para mí, pues se le podía disparar el arma.*

*Esto duró aproximadamente una hora. Me preguntaron unos datos y posteriormente me pusieron una venda en los ojos y me llevaron a una celda chica, yo creo que como 1 mt x 2 o 3 mts de largo, donde había una tabla para recostarse y al fondo un recipiente o baño con un hoyo y estaba todo muy mojado y helado. Allí permanecí como un día, estando todo muy oscuro.*

*Desde ese lugar escuchaba gritos y lamentos muy fuerte al punto que en un minuto, desperté sobresaltado por unos gritos aterradores (a unos 10 metros de mi celda se estaba torturando a personas).*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

*Estuve aproximadamente unas 20 horas ahí; no tenía mucha noción del tiempo, pues no entraba luz.*

*Me vinieron a buscar, indicándome que saliera de espalda y me apretaron más la venda y me llevaron a una sala de tortura.*

*Me dieron la orden de que me desnudara y entre cuatro personas me tiraron sobre una mesa y me amarraron a ella en forma de crucifixión, manos y piernas por separado, boca arriba.*

*Así, desnudo sobre la mesa, me tuvieron unas dos horas sin decirme absolutamente nada.*

*Pasada estas dos horas, me amarraron al ortejo mayor un alambre y con otra argolla me pinchaban diferentes partes del cuerpo, dándome golpes eléctricos muy intensos, que producían mucho terror y no preguntaban nada. Esto ocurrió varias veces hasta que empezaron a preguntar en un lenguaje fuerte, grosero, sobre si yo tenía armas o dinero escondido.*

*Yo respondía que no y que era un dirigente estudiantil de la universidad de Chile en Antofagasta, conocido públicamente, pues salía en la prensa escrita, en la radio en la región, de autoridades civiles, eclesiásticas y que no era mi caso tener armas. Insistían preguntándome donde tenía las armas y respondía nuevamente lo mismo que yo no manejaba armas ni dinero.*

*Todo este interrogatorio iba acompañado de mis gritos, porque, la verdad, duele mucho, es terrorífico sentir la corriente; se te curva el cuerpo completamente, al punto que se te eleva el cuerpo sobre la mesa y así pasaron horas; este procedimiento lo ejecutaban de manera intermitente.*

*Esta situación tortuosa fue por varias horas y yo me di cuenta, porque las voces de los interrogadores eran distintas, lo que indica, que se iban turnando; todos eran militares.*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

*Después me empezaron a dar nombres de algunas personas por si yo las conocía; les dije que no conocía a nadie de las que me nombraban.*

*De allí me enviaron de vuelta a la celda y luego vuelta a la sala de tortura.*

*En un momento me dijeron que sabían quién era yo y que yo había llamado a los soldados en la noche del 10 de septiembre - en una de mis intervenciones públicas - a dispararles a los oficiales.*

*Yo les respondí que efectivamente el día anterior yo había estado en una intervención pública y que había pedido a los soldados no dispararle al pueblo.*

*Uno de ellos insistía en que yo había dicho que los soldados dispararan a los oficiales y yo decía que no era así y en un momento uno de ellos me dijo que lo tenían grabado y yo les argumente que era imposible porque fue en vivo, ante lo cual recibo un tremendo golpe en mi cara, que yo calculo que fue la culata de un arma con el que me dejaron inconsciente.*

*Desperté en la celda, y me doy cuenta de que había perdido dos dientes y un tercero colgando, porque al mover mi lengua siento el vacío; a estas alturas, estoy muy mal física y anímicamente.*

*De repente siento que me dicen "quién eres", yo me identifico y la persona (que habían dejado en mi celda) me dice que me conoce y él también se identifica como Saavedra, regidor de la zona, el que yo también conocía.*

*Me dice que estoy muy golpeado y me recomienda que golpee la celda y les diga (a los militares) que estoy dispuesto a firmar lo que ellos me digan, porque si siguen así torturándome voy a terminar muerto. Le digo que no estoy dispuesto a firmar algo que yo no he hecho. Él me dice que terminarán matándome.*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

*Pasan algunas horas y golpeo la puerta y vienen a buscarme. Me llevan a una oficina, siempre vendado y digo que voy a firmar, pero que me lean el escrito.*

*Ellos me dicen que me la van a leer, pero que firme primero y que, si no lo hago, me volverán a enviar a la sala de interrogatorio.*

*Me levantan un poco la venda y firmo sin saber lo que firmaba. Me llevaron nuevamente a la celda. Allí ya no se encontraba el regidor. A los años después supe que había sido relegado.*

*A todo esto, ya ha pasado una semana estando en Investigaciones; un día cualquiera, después supe que fue el día 22 de septiembre, me sacan vendado en la madrugada, yo calculo que me fue en una camioneta por el tamaño del vehículo; me tiran al suelo y allí hay dos personas más.*

*Este es el momento de mayor temor mío, ya que había escuchado que sacaban gente en la madrugada y los ejecutaban; nadie nos respondía cuál era nuestro destino.*

*No pasaron ni cinco minutos y nos hicieron bajar, caminar y nos dijeron “ahora se pueden sacar la venda”. Al sacármela, me doy cuenta que estoy al interior de la cárcel de Antofagasta. A las otras dos personas la envían a un lado y a mi hacia el otro lado y me llevan a un 3er piso falso que da a la calle.*

*Esta celda es mejor, ya que es más amplia, no estaba mojada y ahí estando solo con mi chaqueta la tiré al suelo y pude, por fin dormir un poco.*

*La verdad es que no sabía cuánto había dormido ni cuanto había estado despierto, pues el cansancio físico y mental me mantenía en un estado de falsa realidad; no sabía si estaba despierto para saber que me iba a pasar o si el cansancio me había vencido y estaba durmiendo.*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

*Así estuve incomunicado desde el 22 de septiembre hasta el día 21 de octubre.*

*En el piso en que yo me encontraba, también estaban muchos dirigentes sociales importantes de la región, como dirigentes sindicales, universitarios, estudiantiles; reconozco a Eugenio Ruiz Tagle y al director de la Corfo regional.*

*A pesar del aislamiento y la incertidumbre, no fui golpeado; nos sacaban una vez al día al baño y nos entregaban la comida en un tiesto, que consistía básicamente en poroto, en poroto y en poroto y un pan. Solo una ración al día; por tanto, los porotos al segundo día se encontraban sabrosos.*

*Los dolores, producto de las torturas y las pérdidas de piezas dentales a esas alturas no eran mi preocupación; solo me preocupaba el saber si iba seguir viviendo, dado que todos los días veía que sacaban compañeros y llegaban con otra gente, especialmente en las noches, donde venía gente de Cerro Moreno (lugar de tortura), que había sido torturada y convertida en estropajo y en calamidad como es el caso del dirigente de apellido Gordillo y de Eugenio Ruiz Tagle.*

*El día 19 de octubre alrededor de las 22.00 horas pasó un oficial con una lista en la mano, nombrando a algunos detenidos, aun cuando siempre sacaban gente, en esta oportunidad, y porque venían varios soldados, se sentía que la situación era diferente.*

*Los soldados preguntaban el nombre en cada celda y sacaban al detenido; en mi piso que había como 10 celdas, sacaron a casi todas las personas, incluido mi compañero del lado que era Ruiz Tagle y los llevaron a la Quebrada del Buey, donde fueron fusilado y masacrados.*

*De esto fui testigo presencial (de que los sacaron de sus celdas y los subieron a un vehículo), pues yo me colgué de la rejilla y vi cuando se los llevaron. No sabía que los iban a matar, lo supe a la mañana siguiente cuando le pedí al gendarme (en la mañana nos*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

*cuidaban los gendarmes y en la noche los militares) que me devolviera la frazada que yo le había pasado a Eugenio Ruiz Tagle, porque era mía, a lo que él me dice que es difícil comprobar que sea mía, que mejor se la reclame a la familia; con ese comentario deduzco lo que le sucedió a Ruiz Tagle y a los otros detenidos.*

*Confirmando mis sospechas después por la expresión de las caras de los gendarmes cuando fui al baño.*

*El 20 o 21 de octubre me sacan del aislamiento y me llevan a otra celda que se llamaba en libre plática y donde me junté con otros dirigentes estudiantiles que venían de mi misma federación y ahí ya pude conversar con ellos un poco más tranquilo hasta que el día 24 de octubre me dejan en libertad y yo tomo destino a Santiago.*

*Mi vida es un antes y después de estos hechos, perdí piezas dentales, los golpes de corriente me dejaron con un temblor permanente en las manos y desde esa fecha comencé con un deterioro progresivo de mi condición física.”*

Afirmaron, que Jorge Madrid a sus 22 años permaneció 10 días en el Cuartel de Investigaciones de Antofagasta a cargo de militares y aviación, fue torturado en forma sistemática, en manos de sus captores sometido y vejado, presenciando como se llevaron a otros compañeros de celda que luego sabría fueron asesinados por la Caravana de la Muerte; luego lo trasladan a la Cárcel Pública de Antofagasta, con aislamiento y en un estado físico y mental de dolor y confusión. En total -arribaron- estuvo privado de libertad sin juicio alguno durante un mes y 9 días, pero los efectos de lo vivido en ese periodo perduran hasta la fecha.

Condensaron, que los hechos descritos constituyen sin duda crímenes de lesa humanidad, suponen una negación de la personalidad moral del hombre, que se manifiesta en que JORGE ALEJANDRO MADRID VALENZUELA fue tratado como una cosa,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

obligado a permanecer desnudo, con menosprecio a su dignidad como persona, porque la característica principal de esta figura es la forma cruel con que se realizan: quienes torturaron a JORGE ALEJANDRO MADRID VALENZUELA, quienes actuaron con esa maldad y respaldados por su carácter de agentes del Estado, se ensañaron con él por sus ideas y calidad de dirigente estudiantil, lo ultrajaron, lo vejaron en su cuerpo y en su intimidad como ser humano hasta que sus fuerzas no dieron más para resistir.

Dijeron, que Jorge Madrid Valenzuela fue privado de la libertad por agentes del estado, de manera injustificada, ilegal y arbitraria, solo a consecuencia de la forma abusiva e ilegítima con que operaban las fuerzas represivas de la época, en el contexto de una situación de anormalidad institucional derivada del golpe militar, nunca existió una orden judicial, ni alguna circunstancia justificada en la ley para detenerlo. Su detención -continuó-solo se explica como parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil que tiene su origen en una política de estado, con todas las secuelas físicas y psicológicas, en su persona, que se han extendido en el tiempo hasta el día de hoy.

Sostuvieron, que como consecuencia directa de la tortura de que fue víctima y la prisión política de su representado, se desprende, inequívocamente, un perjuicio tanto psíquico, como físico incommensurable provocado por el Estado de Chile.

Citaron sentencias de la Excma. Corte Suprema de Justicia, causas Rol Ingreso N° 157.962-2022, N° 2097-2004 y N° 5946-2009.

Explicaron, que se han vulnerado todos aquellos instrumentos de carácter internacional que consagren el derecho a la vida y a la integridad personal, principalmente, los arts. 1, 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el art. 1.1, 5, 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1° de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, los arts. 6



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todo el contenido de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, los Principios de Núremberg, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y las normas de ius cogens relativas a crímenes internacionales.

Indicaron, que la responsabilidad del Estado encuentra su fundamento en las normas de Derecho Público, y en primer término en la Constitución Política de la República. En este punto, mencionó, entre otros, el artículo 38, inciso segundo, artículo 1° inciso cuarto, artículo 5° inciso segundo, y artículos 6° y 7° de dicho cuerpo legal.

Refirieron, sobre la naturaleza de la responsabilidad del Estado, que no solo es solidaria por los hechos de sus agentes, sino que, además, está regida por el derecho público y no por el derecho privado. El Estado de Chile -continuó-, ha reconocido su responsabilidad en estos hechos en forma expresa a través del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y reconoce al demandante como víctima de la práctica institucional de la tortura lo cual debe servir como demostración del reconocimiento del Estado de su responsabilidad.

Al respecto, citaron una sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N° 3841-12, de 4 de septiembre de 2013.

Comentaron, que las acciones judiciales en casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, así lo ha declarado la Excma. Corte Suprema en numerosos fallos, entre ellos en la causa Rol N° 34.111-19, de 16 de junio de 2020.

Concluyeron, que en el caso del actor concurren todos los elementos para reparar e indemnizar en concordancia con la magnitud y el tipo de delito de que fue víctima:



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

a) Existencia de una acción u omisión de un órgano del Estado.

En este caso, específicamente por agentes del Estado, en el contexto de un genocidio, mediante la perpetración de crímenes lesa humanidad contra opositores, represión política, persecución, violencia, tortura y muerte. No hubo procedimientos racionales, justicia, legalidad ni misericordia. El hecho criminal cometido es imputable al Estado de Chile, puesto que fue un órgano de su administración el que actuó y debe entenderse que ha actuado el Estado como tal.

b) Existencia de un daño. Por el sólo hecho de haberse producido un crimen internacional que afecta gravemente los derechos humanos el daño se presume, especialmente el daño moral y corporal. Sin perjuicio de lo anterior, y como el resultado es evidente, este daño se probará también en la etapa procesal pertinente.

c) Nexos causal. El daño a la víctima emana, justamente, de la perpetración del delito. A consecuencia de un sistema que buscaba vulnerar derechos fundamentales se causaron los más crueles sufrimientos.

d) No existen causales de justificación que eximan al Estado de su responsabilidad en este caso.

Invocaron, sólo de manera ilustrativa, sentencias de la Excma. Corte Suprema dictadas durante el año 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, que establece la procedencia de la indemnización por daño moral en casos de delitos de lesa humanidad, como el caso de su demanda:

1.- “D’Orival con Fisco”, Rol 8.106-2018, de fecha 29 de enero de 2019.

2.- “Morales con Fisco”, Rol 12.636-2018, de fecha 29 de enero de 2019.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

3.- “Salinas con Fisco”, Rol 12.715-2018, de fecha 6 de febrero de 2019.

4.- “Meza con Fisco”, Rol 3363-2019, de fecha 21 de febrero de 2019.

5.- “Caucoto con Fisco”, Rol 15.402-2018, de fecha 21 de febrero de 2019.

6.- “Fernández con Fisco”, Rol 31363-2018, de fecha 26 de febrero de 2019.

7.- “Pozo con Fisco”, Rol 29.944-2018, de fecha 26 de marzo de 2019.

8.- “González con Fisco”, Rol 29.463-2018, sentencia de 26 de marzo de 2019.

9.- “Muñoz y otros con Fisco”, rol 31.605-2018, sentencia de 13 de mayo de 2019.

10.- “González con Consejo de Defensa del Estado”, rol 31.766-2019, sentencia de 28 de mayo de 2019.

11.- “Osses con Fisco” rol 29.448-2019, sentencia de 27 de agosto de 2019.

12.- “Merari con Fisco”, rol 31.272-2018, sentencia de 29 de agosto de 2019.

13.- “Rain con Fisco”, rol 6853-2019, sentencia de 29 de septiembre de 2019.

14.- “Torrealba con Fisco”, rol 8318, sentencia de 26 de septiembre de 2019.

15.- “Coulon con Fisco”, rol 17.710-2019, sentencia de 24 de octubre de 2019.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

16.- “Beausire con Fisco, rol 14.316-2019, sentencia de 24 de octubre de 2019.

15.- “Saavedra con Fisco”, rol 3432-2018, sentencia de 03 de diciembre de 2019.

16.- “Torres con Fisco”, rol 18.179-2019, sentencia de 06 de diciembre de 2019.

17.- Concha y otros con Fisco, rol 34.119-19, sentencia de 16 de junio de 2020

18.- González y otros con Fisco, rol 36.905-19, sentencia de 16 de junio de 2020.

19.- Iribarren González contra el Fisco de Chile, sentencia Rol N° 79259-20, de 6 de julio de 2021.

20.- “Episodio Paine principal”, sentencia Rol N° 149.250-20, de 14 de junio de 2022

21.- Uribe Tamblay contra el Fisco de Chile, sentencia Rol N° 138.662-2020 de 29 de agosto de 2022.

22.- Fodich Castillo contra Fisco de Chile, sentencia Rol 14.104-2021 de 20 de octubre de 2022.

23.- Leichtle, Vargas contra Fisco de Chile, sentencia Rol N° 82303-2021 del 14 de abril de 2023.

24.- Tapia Irarrazabal Víctor Con Fisco-Cde, sentencia Rol: 48754-2022 de q2 de septiembre de 2023.

25.- Ardouin Shand Norman Con Fisco De Chile, sentencia Rol: 137700-2022, de 12 de septiembre de 2023.

26.- Vidal Mora Joaquín Con Consejo Defensa Del Estado Lte, sentencia Rol: 91373-2022, de 11 de septiembre de 2023.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

27.- Fuentealba Herrera María Con Fisco Chile-CDE, sentencia Rol: 137709-2022, de 11 de septiembre de 2023.

28.- Valenzuela Maureira Juan Con Fisco CDE, sentencia Rol: 136847-2022, de 18 de agosto de 2023.

Esgrimieron, que la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha zanjado temas tales como el de la prescripción de la acción civil que deriva de un crimen de lesa humanidad, la preterición legal y la excepción de pago reclamada por el Fisco en materia de las reparaciones civiles hechas valer en el juicio penal ya que la gran mayoría de los Sres. Ministros que conocen de causas por violaciones de los derechos humanos han fallado a favor de la pretensión de las víctimas y sus familiares, sintonizando de esa manera con la normativa internacional que propende a esa reparación mediante instancias expedidas y no dilatorias, lo que ha sido ratificado por la Segunda Sala Penal de la Excma. Corte Suprema.

Solo a manera de ejemplo ilustrativo, de lo que se ha configurado como una jurisprudencia reiterada y uniforme de la Excma. Corte Suprema, citaron un fallo dictado con fecha 21 de agosto de 2023, causa rol 139.776-2022, en la que se revocó la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó la demanda al acoger la excepción de prescripción extintiva opuesta por el Fisco.

Finalmente, destacaron la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y específicamente en relación a Chile, el CASO ÓRDENES GUERRA Y OTROS VS. CHILE, sentencia de 29 de noviembre de 2018, caso en el cual el Estado de Chile reconoció ante el órgano internacional que las pensiones asistenciales son compatibles con las indemnizaciones otorgadas por los Tribunales de Justicia, admitió su responsabilidad, reconociendo la imprescriptibilidad de estas acciones, afirmando el carácter no excluyente entre la indemnización civil fijada por los Tribunales de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

Justicia y las pensiones que establecen normas como la Ley N° 19.123.

En el petitorio del libelo pretensor, solicitó tener por interpuesta demanda de indemnización de daños y perjuicios a **JORGE ALEJANDRO MADRID VALENZUELA** en contra del Fisco de Chile, representado por la Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don **RAÚL LETELIER WARTENBERG**, ya individualizado, acogerla a tramitación y, en definitiva, condenar al demandado al pago de la suma de \$300.000.000 (trescientos millones de pesos) más reajustes de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor que la cantidad devengue, desde el día en que la presente sentencia quede ejecutoriada y hasta el momento del pago efectivo y total de la misma e intereses o la suma que S.S. estime ajustada a derecho, justicia y equidad, al mérito de autos; con costas.

A folio 8, consta la notificación de la demanda y su proveído a la parte demandada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

A folio 9, compareció don **MARCELO EDUARDO CHANDÍA PEÑA**, Abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, en representación del **FISCO DE CHILE**, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1.225, piso 2, comuna de Santiago, Región Metropolitana, quien, en la representación investida, contestó la demanda interpuesta de contrario, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que se reproducen a continuación.

#### **1.- EXCEPCIÓN DE REPARACION INTEGRAL SATISFACTIVA, POR HABER SIDO YA INDEMNIZADA LA PARTE DEMANDANTE.**

a) Marco general sobre las reparaciones otorgadas por el Estado.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

Expuso, que no resulta posible comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional; en efecto, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior –y desde– lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada “Justicia Transicional”.

Afirmó, que el denominado dilema “justicia versus paz” es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional; argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso “nunca más”. En esta perspectiva -dijo-, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

Agregó que, por otro lado, no debe olvidarse que desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada, el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas.

Sostuvo que, en este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos; este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación.



«RIT»

Foja: 1

Explicó, que estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero; en este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello -continuó- revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de nuestra ley Nº 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella; no debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

b) La complejidad reparatoria.

Mostró que, como expresa Lira, los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del Presidente Patricio Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron “(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse”.

Profundizó, en lo relacionado con aquel segundo objetivo, que la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación” entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud; dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

Abundó, en que el mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, “reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”.

Indicó que, por su parte, y en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación cabe indicar que el Ejecutivo, siguiendo el referido Informe de la comisión, entendió por reparación “un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe”. A dicha reparación -sostuvo- ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en “un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas”; compensación de daños morales y mejora patrimonial, son así dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

Aclaró que, de esta forma, en la discusión de la ley 19.123 el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro; en diversas oportunidades, por ejemplo, se hizo referencia a la reparación “moral y patrimonial” buscada por el proyecto. La noción de reparación “por el dolor” de las vidas perdidas se encontrada también en otras tantas ocasiones. También está presente en la discusión -afirmó- la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal “de indemnización” y reparación. Incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente la “responsabilidad extracontractual” del Estado.

Así las cosas -expuso-, esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover “la reparación del daño moral de las víctimas” a que se refiere el artículo 18.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRRHR

«RIT»

Foja: 1

Esclareció que, asumida esta idea reparatoria, la ley 19.123 y, sin duda, las demás normas conexas (como la ley 19.992, referida a las víctimas de torturas) han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional.

Manifestó que, en ese orden de ideas, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber:

- i) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero;
- ii) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y
- iii) Reparaciones simbólicas.

Expuso que por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas; un análisis de estas compensaciones habilitará a verificar el ámbito compensatorio que ellas han cubierto.

- c) Reparación mediante transferencias directas de dinero.

Expresó, que diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo también -como se ha mencionado- a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos.

Sostuvo que, en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de:



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

i) Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech);

ii) Bonos: la suma de \$41.910.643.367- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992;

iii) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123; y

iv) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737-

Señaló que, en consecuencia, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-

Alegó que, siguiendo una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cuál fue su impacto compensatorio. Pues bien, el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar.

Indicó, que el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto; ellas son, como se ha entendido de manera generalizada, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos obteniéndose con ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

d) Reparaciones específicas.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

Afirmó que, en lo tocante al caso que nos ocupa, la parte demandante ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la ley N° 19.992 y sus modificaciones, que estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas.

Añadió, que así se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$ 1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$ 1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Señaló que, de esta forma, conforme se acreditará en la etapa procesal pertinente, la parte demandante ha recibido, hasta la fecha, los beneficios y montos contemplados en las leyes de reparación mencionadas.

e) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas.

Expuso que, tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase.

Refirió que, en este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

Esbozó, que para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS y, además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad -precisó- cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios; a nivel presupuestario, PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006 y el año 2020, el Programa sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$6.543.883. Este presupuesto -ahondó- se distribuye por Servicio de Salud, permitiendo cubrir gastos asociados al recurso humano de los equipos de salud PRAIS, equipamiento y para la adquisición de ayudas técnicas o prestaciones que requieren beneficiarios en el extra sistema, focalizando principalmente en la población directamente afectada y en el artículo 10 de la Ley 19.992; sin perjuicio de ello, como usuarios del sistema público de salud, los beneficiarios adquieren los derechos establecidos para todos los usuarios FONASA; obtienen el derecho de organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de Autoridad Sanitaria crea, tanto en los establecimientos como a nivel de la red y secretaría regional, y; adquieren el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y en la promoción del resto de los Derechos Humanos. Se les ofrece asimismo apoyo técnico y rehabilitación física -últimó- para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Explicó, que igualmente se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

superiores, y que el organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho es la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. A modo de ejemplo -continuó-, un hijo o nieto del beneficiario, y siempre que el beneficiario original no hubiese hecho uso de él, ha podido postular a las becas Bicentenario, Juan Gómez Millas, Nuevo Milenio o a las establecidas para estudiantes destacados que ingresan a la carrera de pedagogía, en la forma y condiciones que establece el reglamento de dichas becas. Expresó que, asimismo, se concedieron beneficios en vivienda, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda.

f) Reparaciones simbólicas.

Mencionó que, al igual que todos los demás procesos de justicia transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH. se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones; este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor –siempre discutible en sus virtudes compensatorias– sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral.

Arguyó, que la doctrina, en este sentido, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables.

Contó, que en esta compleja tarea de entregar una compensación satisfactiva destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica como la construcción de memoriales, un museo de la memoria y los Derechos Humanos, la conmemoración del “Día Nacional del Detenido Desaparecido” y el establecimiento del Premio Nacional de los Derechos humanos. Todos ellos unidos



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

-complementó- a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc.

g) La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas.

Señaló que, de todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH.

Planteó que, así las cosas, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos; de esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente, alegó.

Expuso, que en este punto el fallo Domic Bezic, Maja y otros con Fisco ha sido especialmente gráfico cuando afirma que una pretensión indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la Ley 19.123 pues “aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria del daño moral cuyo resarcimiento pretende la acción intentada en este juicio y ellos son financiados con recursos fiscales, conforme se desprende de lo establecido en el Título VI de ese texto legal”.

Esgrimió que, en el mismo sentido, diversas sentencias ya habían insistido en que el propósito de estas leyes fue precisamente “reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”, lo que constituye un factor congruente con



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

resoluciones de Tribunales Internacionales, relativas a la improcedencia de la indemnización.

Mentó, en este mismo orden de ideas, que el documento denominado “Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos” (*Rule of Law for post-conflicts states*) se ha referido expresamente a los programas de reparación; en él se ha reconocido la existencia de un problema al exigir indemnización por la vía de los programas de reparación y paralelamente, ejercer una acción civil, por la vía judicial.

Indicó que, así, una vez que el Gobierno ha hecho esfuerzos de buena fe en crear un sistema administrativo que facilita la entrega de beneficios a las víctimas, permitir a los mismos beneficiarios iniciar litigios contra el Estado genera el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño. Pero todavía peor -agregó-, ello pone en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que mientras el primer problema puede ser fácilmente solucionado estipulando que no pueden perseguirse beneficios dos veces por la misma violación, el segundo no es fácilmente evitable toda vez que los beneficios obtenidos en los tribunales pueden fácilmente sobrepasar a los de un programa masivo de reparaciones. Esto puede generar -continuó- un cambio en las expectativas y generalizar una sensación de desilusión con los programas administrativos; incluso más, este cambio puede ser motivado por casos que seguramente no son representativos de todo el universo de víctimas y que más encima vienen a acentuar las desigualdades sociales entre las víctimas. Así -concluyó sobre el punto-, víctimas más educadas o pertenecientes a las ciudades tienen normalmente una probabilidad más alta de conseguir reparaciones por la vía de la litigación civil que víctimas más pobres, menos educadas, que habitan en el campo o que pertenecen a grupos étnicos, raciales o religiosos marginados.

Sostuvo que, en la misma línea, es precisamente el rechazo a nuevas peticiones de indemnización lo que fortalece los programas de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

Justicia Transicional; lo contrario, esto es, dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación.

Concluyó, que estando las acciones interpuestas en autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo ella indemnizar los mismos daños que han inspirado el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, es que opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizada la parte demandante de la presente causa.

## **2.- EN SUBSIDIO, EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA.**

Opuso, en subsidio de la excepción de reparación integral alegada, la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida, conforme a los siguientes argumentos:

a) Normas de prescripción aplicables.

Expresó, que opone la excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes.

Opuso, en consecuencia, la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechacen íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita, señaló.

**En subsidio**, alegó que, en el caso que se estime que la norma anterior no es aplicable a este juicio, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRRHR

«RIT»

Foja: 1

derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil que contesta, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

b) Generalidades sobre la prescripción.

Alegó que, por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles; por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe, indicó. Sostuvo que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras. Por eso -explicó- es que la jurisprudencia ha señalado que para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad.

Refirió, que la prescripción es una institución universal y de orden público; efectivamente, las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Acotó que, entre estas normas, está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, y que consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto), la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

Agregó, que la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2.494, inciso 1º, del Código Civil). Indicó que, la responsabilidad que se atribuye al Estado y la que



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio extra patrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado.

c) Fundamento de la prescripción.

Razonó, que la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Destacó que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora e indispensable en nuestro orden social, está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas; y por las mismas razones la prescripción no es -en sí misma- como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores, ya ue estas últimas no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Resulta inaceptable -afirmó- presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales, la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización, solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción.

Expuso que, por otro lado, no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa, indicó.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

Añadió que, en la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que la parte demandante estuvo en situación de hacerlo.

d) Jurisprudencia sobre la prescripción.

Al respecto, indicó que nuestra Excma. Corte Suprema, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil dictó, el 21 de enero de 2013, una histórica sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

Sostuvo que en dicha sentencia, nuestro Máximo Tribunal en Pleno, zanjó esta controversia, señalando: 1º) Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva; 2º) Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal; 3º) Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto; y 4º) Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

desde la desaparición del secuestrado, sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia.

Mencionó, que las sentencias anteriores y posteriores al citado fallo no hacen más que reiterar la misma doctrina, constituyendo jurisprudencia contundente en la materia, acogiendo las argumentaciones hechas valer por esta defensa, lo que solicitamos se tenga especialmente en consideración al momento de resolver la presente Litis.

e) Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria.

Manifestó, que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial; de allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté –como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.

Previno, sobre el particular, que debe considerarse, como en forma reiterada se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la reiterada jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

Recalcó que, en efecto, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción, incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos, por lo que no existe fundamento plausible



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRRHR

«RIT»

Foja: 1

para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

f) Normas contenidas en el Derecho Internacional.

Afirmó, que su parte se hará cargo de ciertos instrumentos internacionales, estimando que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

Esgrimió, que la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, aprobada por Resolución N° 2.391 de 26 de Noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1º letras a) declara imprescriptibles a “los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero cabe señalar –tal como lo ha reconocido la Excma. Corte Suprema- que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

Subrayó, que los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal.

Adujo, que la Resolución N° 3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad”, se refiere exclusivamente a las acciones penales para



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

Enarboló, que la Convención Americana de Derechos Humanos, no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria; al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990. Por otra parte -continuó-, el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultándola para imponer condenas de reparación de daños, pero ello no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción, en Chile; es decir, el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia. Luego, indicó que el planteamiento de la defensa fiscal ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país en reiterados fallos.

Arguyó que, no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el tribunal no debe apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado, debiendo rechazar la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

### **3.- EN SUBSIDIO, ALEGACIONES EN CUANTO AL DAÑO E INDEMNIZACION RECLAMADA.**

Formuló, en subsidio de las defensas y excepciones precedentes, las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada:

#### **a) Fijación de la indemnización por daño moral.**

Alegó que, con relación al daño moral, éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales, lo que dependerá, de las secuelas sufridas con motivo de los hechos señalados en el libelo y de conformidad a los antecedentes que obren en autos en la etapa probatoria del mismo; así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente.

Ello produce a su respecto -continuó- una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria; en términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso; por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Precisó que, es en la perspectiva antes indicada, que hay que regular el monto de la indemnización, debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

Advirtió, por otra parte, que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

Apuntaló que, no habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago. En tal sentido -añadió-, la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, resulta excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia, citando jurisprudencia al efecto.

b) La especial naturaleza que informa al daño moral que se alega, no exime a la parte de su carga de probar su efectiva concurrencia y de una valoración racional y prudente del juez.

Afirmó, que se debe observar la necesaria distinción entre la presunción como herramienta jurídica normativa y aquella que se emplea como medio de convicción judicial, pues si bien es perfectamente factible que el fallador arribe a la conclusión que,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

efectivamente, se verificó una afectación moral indemnizable a partir de una multiplicidad de hechos graves, ciertos y conocidos, (demostrables al menos indirectamente), ello no exime a la parte demandante de probar su daño, ya que no existe norma alguna que permita presumir la concurrencia del daño moral ni mucho menos a invertir el peso de la prueba en la materia.

Destacó que, en relación con la cuantificación de este género de indemnizaciones, viene al caso recordar que si bien es cierto que no está sujeta a tarifas o valoraciones en texto positivo alguno, los fallos judiciales han mantenido alguna correspondencia entre ellos, lo que demuestra que cabe aplicar principios de racionalidad y prudencia en la regulación de aquél, los que pugnan con una tasación genérica o abstracta. Los tribunales superiores en fecha reciente -agregó-, han declarado, además, que la constatación de la efectiva concurrencia y valoración de los perjuicios morales no se puede dar por establecida con el sólo hecho de haberse incorporado los nombres de las víctimas en las nóminas libradas por los órganos encargados de materializar los beneficios de las leyes de reparación, estableciéndose incluso que, a falta de mayor prueba, dichas pretensiones deben ser desestimadas; así mismo, tal como ha señalado nuestra jurisprudencia en esta materia, existe el imperativo de S.S. de analizar en detalle los antecedentes en que se fundan los perjuicios que la detención, tortura y apremios ilegítimos provocaron a la parte en el caso particular, así lo ha indicado expresamente la Excma. Corte Suprema.

Concluyó, que el Tribunal ha de establecer los hechos materiales que determinan la existencia del daño invocado, los aspectos que reflejan su ilegitimidad y los factores que tiene en consideración para proceder a su regulación, tarea a la cual aportan el cúmulo de herramientas de las que se deja constancia con precedencia.

c) En subsidio de las excepciones anteriormente expuestas, alegó que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

Sostuvo, que el tribunal debe considerar todos los pagos recibidos por la parte demandante a través de los años por parte del Estado, conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirá percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral.

Ultimó, que de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

#### **4.- IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE REAJUSTES E INTERESES.**

Además de todo lo alegado, hizo presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada, y no desde la fecha de notificación de la demanda, como solicita la parte demandante; lo anterior implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada. El reajuste es un mecanismo económico-financiero -precisó- que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal; desde esta perspectiva, no procede aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha anterior a la determinación del monto respectivo por sentencia ejecutoriada.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

Apuntó que, respecto de los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia; la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores así lo ha decidido de manera uniforme.

Finiquitó que, por consiguiente, en el hipotético caso de que se decida acoger la acción de autos y se condene a su parte al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su parte incurra en mora.

**En el petitorio de su presentación,** solicitó tener por contestada la demanda civil deducida en autos y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar dicha acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

A folio 12, el actor evacuó la réplica.

A folio 15, el demandado evacuó la dúplica.

A folio 19, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos substanciales, pertinentes y controvertidos.

A folio 32, se citó a las partes a oír sentencia.

#### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que don **ALBERTO ESPINOZA PINO** y doña **MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN**, abogados, en representación de don **JORGE ALEJANDRO MADRID VALENZUELA**, dedujeron en juicio de hacienda una acción de indemnización de perjuicios en contra del **FISCO DE CHILE**, representado legalmente por el Presidente del



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

Consejo de Defensa del Estado, don **RAÚL SERGIO LETELIER WARTENBERG**, todos ya individualizados, y, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que se reproducen en la parte expositiva de esta sentencia, solicitó, en definitiva, condenar al demandado al pago de la suma de \$300.000.000 (trescientos millones de pesos) más reajustes de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor que la cantidad devengue, desde el día en que la presente sentencia quede ejecutoriada y hasta el momento del pago efectivo y total de la misma e intereses o la suma que S.S. estime ajustada a derecho, justicia y equidad, al mérito de autos; con costas.

don **MARCELO EDUARDO CHANDÍA PEÑA**, Abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, en representación del **FISCO DE CHILE**, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1.225, piso 2, comuna de Santiago, Región Metropolitana, quien, en la representación investida, contestó la demanda interpuesta de contrario, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que se reproducen a continuación.

**SEGUNDO:** Que don **MARCELO EDUARDO CHANDÍA PEÑA**, Abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, en representación del **FISCO DE CHILE**, ambos ya individualizados, contestó el libelo interpuesto de contrario, y, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que se reproducen en la parte expositiva de este fallo, solicitó, en definitiva, rechazar la acción indemnizatoria deducida en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

**TERCERO:** Que, del análisis del contenido de los escritos que componen la etapa de discusión, se advierte que es un hecho pacífico o no controvertido entre las partes, que el demandante figura en el listado de prisioneros políticos y torturados de la nómina de personas reconocidas como víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

**CUARTO:** Que, de lo expuesto por las partes en la etapa de discusión, el objeto de la litis se centra en determinar, en primer lugar, la existencia de actos reparatorios e indemnizatorios ya otorgados al demandante, con ocasión de los hechos denunciados y, en su caso, naturaleza, detalle, fecha de otorgamiento y monto de aquéllos; en segundo lugar, si la acción deducida en autos se encuentra prescrita; en tercer lugar, la existencia de los daños alegados y, en su caso, naturaleza, entidad, monto y existencia de actos de mitigación de los perjuicios referidos; y, por último, el origen, naturaleza y monto de los mismos; en segundo lugar, la existencia de actos reparatorios e indemnizatorios ya otorgados al demandante, con ocasión de los hechos denunciados y, en su caso, naturaleza, detalle, fecha de otorgamiento y monto de aquéllos; en tercer lugar, si la acción deducida en autos se encuentra prescrita; en cuarto lugar, la existencia de actos de mitigación de los perjuicios alegados por el actor y, en la afirmativa, naturaleza, entidad y monto; y, por último, si existe una relación de causalidad entre la actividad desplegada por el demandado y los daños alegados por el actor.

**QUINTO:** Que el demandante, a fin de comprobar sus dichos, rindió las siguientes pruebas:

**A. PRUEBA DOCUMENTAL,** legalmente acompañada a folios 1 y 23, y no objetada por su contraparte, consistente en:

**1.** Nómina del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

**2.** Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, establecida por el Decreto Supremo N° 1.040, de 2003.

**3.** Carpeta de Antecedentes del demandante, ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

**4.** Publicación en el diario El Mercurio de Antofagasta, de fecha 25 de octubre de 1973.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

5. Informe de evaluación de daños por efectos de la tortura evacuado por el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS) del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

6. Norma General Técnica N° 88, para la Atención de Personas Beneficiarias del Programa de Atención en Salud a las Personas Afectadas por la Represión Política ejercida por el Estado en el Período 1973-1990” del Departamento de salud mental de la División de prevención y control de enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud.

7. Capítulo del Informe Valech sobre los métodos de torturas.

8. Capítulo del Informe Valech que se refiere a las consecuencias de las torturas en las víctimas.

9. Estudio descriptivo de mortalidad en sobrevivientes de tortura y prisión política en el período de la dictadura militar en Chile, 1973-1990, realizado por la Universidad de Chile.

**B. PRUEBA TESTIMONIAL**, recibida a folio 25, consistente en la declaración don Claudio César Verdugo Sobral y don Aníbal José Rubio Lara, quienes, sin tacha, legalmente juramentados e interrogados, expusieron, en lo pertinente, lo siguiente:

1. Don Claudio César Verdugo Sobral:

Al tercer y cuarto punto de prueba e interrogado para que diga si sabe y cómo le consta cuáles fueron los hechos de que fue víctima don Jorge Madrid Valenzuela a partir del mes de septiembre de 1973, afirmó que le constan los hechos porque conoce a la familia de la primera cónyuge del señor Madrid, doña Rossana Mschi, madre de sus dos hijos, y a Jorge lo conoció aproximadamente en el año 1978-1979, cuando él pololeaba con Rossana. Agregó, que supo por el relato de esta última, que Jorge había sufrido prisión política en el mes de septiembre de 1973 como consecuencia de haber sido presidente



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

de la federación de estudiantes de la sede Antofagasta de la U. de Chile, y como consecuencia del golpe de estado, fue requerido por las autoridades militares de la ciudad de Antofagasta a fin de que se presentara en el cuartel de la Policía de Investigaciones; es detenido el 15 de septiembre o por esas fechas aproximadamente y llevado a este cuartel donde fue interrogado bajo torturas por miembros del ejército, también habían otros presos en ese lugar, dirigentes de organizaciones sociales de la ciudad de Antofagasta.

Repreguntado si tiene conocimiento de qué fue lo que sufrió el demandante y tiempo qué estuvo privado de libertad y lugar, respondió que de acuerdo con el relato de la familia es que, durante los 10 días de prisión, fue objeto de brutales torturas, cuando estuvo secuestrado o detenido en el cuartel de investigaciones de la ciudad de Antofagasta; las torturas consistieron en aplicación de electricidad, golpes, permaneció vendado, se le produjo fracturas de piezas dentales, y todas las consecuencias desde el punto de vista de la salud mental originadas en las numerosas formas en que fue sometido a tortura. Añadió, que estuvo detenido en el cuartel de investigaciones, y luego en la cárcel de Antofagasta.

Repreguntado para que diga si sabe qué daños físicos, psicológicos, sociales, laborales, familiares u otros dolores personales se le causaron a Jorge Madrid a raíz de su secuestro, detención, torturas y prisión política de que fue objeto a partir de septiembre de 1973, refirió a la fractura que significó en su vida la detención y secuestro, y la posterior expulsión de la Universidad de Chile, sede Antofagasta, donde cursaba segundo año de la carrera de servicio social, lo que significó que, una vez puesto en libertad, tuvo que desarrollar trabajos menores para efectos de sobrevivir en un contexto sumamente hostil para ex presos políticos y, por tanto, se truncó su proyecto de vida. Adicionó que, como consecuencia de la tortura y prisión política, sufrió la pérdida de su dentadura, además de diversas lesiones en otras partes del cuerpo por aplicación de electricidad como



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

método de tortura; y que, desde el punto de vista de la salud mental, ha tenido desde esa época dificultades relacionadas con trastornos del sueño, sufre de insomnio, ansiedad, y recurrentemente tiene sueños con las atroces torturas de las que fue víctima.

## 2. Don Aníbal José Rubio Lara:

Al tercer y cuarto punto de prueba e interrogado para que diga si sabe y cómo le consta cuáles fueron los hechos de que fue víctima don Jorge Madrid Valenzuela a partir del mes de septiembre de 1973, comentó que conoce al demandante desde el año 1971 cuando llega al pensionado en el que vivía en Antofagasta, en la calle Baquedano 263, estuvieron viviendo en la misma habitación 4 estudiantes, y quien declara estuvo hasta el año 1972, además Jorge Madrid era presidente de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile, sede Antofagasta, y él era el Secretario de Finanzas de la Federación. Agregó, que les notificaron que Jorge había sido detenido el 15 de setiembre de 1973, lo fueron a buscar al pensionado de calle Baquedano, lo llevaron los detectives y ya no lo vio hasta que se encontraron en la cárcel pública de Antofagasta, cuando ingresó el 2 de octubre de 1973. Sostuvo que, en este último lugar, los llamó el dentista para verlos y ahí se encuentra con Jorge a quien le faltaban piezas dentales y, al preguntarle, le dice que le pegaron unos culatazos los militares en el cuartel de investigaciones, y lo habían desnudado para aplicarle corriente, el dentista le sacó los dientes que habían quedado quebrados, no recuerda si dos o tres. Finalmente, sobre el particular, dijo que salieron en libertad el 24 de octubre, fueron expulsados de la universidad, no vio a Jorge, puesto que se fue al extranjero a vivir, y cuando volvió no preguntó por nadie, pero se encontraron en un evento cuando trabajaba él para la Municipalidad de Santiago.

Repreguntado para que diga si sabe qué daños físicos, psicológicos, sociales, laborales, familiares u otros dolores personales



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

se le causaron a Jorge Madrid a raíz de su secuestro, detención, torturas y prisión política de que fue objeto a partir de septiembre de 1973, respondió que eran jóvenes de 22 años con un futuro hermoso, Jorge estudiaba para ser trabajador social y tener que volver a Santiago a trabajar en diferentes actividades cuando pretendía ser un profesional es un dolor irreparable. Fuera de ello -continuó-, como se han visitado después del año 90, vio con mucho dolor que Jorge fumara mucho y que ahora tiene un enfisema pulmonar, lo que se debe a que empezó con el tabaquismo para superar las penas de las torturas y la época de la prisión. Concluyó, que sigue siendo introvertido, no conversa con nadie; y que cree que los daños que sufrió en la estadía en investigaciones y luego la cárcel, le dañaron la salud mental y física, y es por ello que en su vida laboral ha estado con problemas.

**SEXTO:** Que, por su parte, en su escrito de contestación de folio 9, la demandada solicitó despachar oficio al Instituto de Previsión Social, a fin de que informe sobre todos los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que ha obtenido el demandante, especialmente en relación con las leyes 19.123, 19.234, 19.992, 20.874, y demás pertinentes; cuya respuesta consta a folio 14, y que consiste en Ordinario DSGT N° 24399/2024 del Instituto de Previsión Social, de fecha 18 de junio de 2024.

**SÉPTIMO:** Que, del análisis del contenido de los medios legales de prueba incorporados al pleito, ya descritos en los motivos quinto y sexto, debidamente ponderados y valorados en forma legal, se tienen por acreditados los siguientes hechos:

1. Que el demandante tiene la calidad de víctima de violaciones a sus derechos humanos, consistentes en detención, prisión, apremios ilegítimos y tortura, cometidos por agentes del Estado, con ocasión de la dictadura cívico-militar que tuvo lugar en nuestro país a contar del 11 de septiembre de 1973.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

2. Que, con motivo de lo anterior, el actor fue sometido a una evaluación psicológica ante el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (“PRAIS”), cuyo informe, en lo pertinente, presenta las siguientes conclusiones:

*“A nivel médico, el relato y la sintomatología de don Jorge son altamente consistentes con secuelas de tortura. (...)”*

*Las secuelas estado de salud, producto del Evento Represivo del que es sobreviviente don Jorge, son evidentes, ya que tiene diversos diagnósticos de salud: enfisema pulmonar producto del tabaquismo que inició mientras estaba detenido, hipertensión arterial, hiperlipidemia, obesidad y cáncer de próstata, además de padecer insomnio.” (sic)*

3. Que el demandante ha recibido, a la fecha de emisión del Ordinario acompañado por el Instituto de Previsión Social, singularizado en el motivo precedente, esto es, al día 18 de junio de 2024, beneficios de reparación por un monto total de \$40.194.872, y percibe una pensión actual de \$264.898.

**OCTAVO:** Que, previo a abordar el estudio del fondo de la controversia, corresponde emitir pronunciamiento sobre la excepción de reparación integral y la excepción de prescripción extintiva, opuestas por el demandado, toda vez que la decisión de ambas incide en la procedencia de la pretensión indemnizatoria del actor.

**NOVENO:** Que, en cuanto a la **excepción de reparación integral** opuesta por el demandado, este alegó que la pretensión indemnizatoria de la parte demandante se encuentra previamente satisfecha por haber sido indemnizada, en su concepto, conforme a las leyes que indica y a los fundamentos reseñados en la parte expositiva, a la cual el Tribunal se remite por economía procesal.

Sobre el particular, de acuerdo a lo indicado en el motivo tercero, es un hecho no controvertido que la demandante se encuentra



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

calificada como víctima de prisión política y tortura, en la respectiva nómina pública, y, en consecuencia, y tal como se ha dado por acreditado en el basamento séptimo, tiene la calidad de víctima de violaciones a sus derechos humanos, consistentes en detención, prisión, apremios ilegítimos y tortura cometidos por agentes del Estado con ocasión de la dictadura cívico-militar que tuvo lugar en nuestro país a contar del 11 de septiembre de 1973.

Al respecto, las víctimas de dichos atentados son beneficiarias de los mecanismos tendientes a su reparación, establecidos en la Ley N° 19.123, ampliada posteriormente por la Ley N° 19.980, de lo que se colige que el Estado de Chile, demandado en autos, ha reconocido en forma voluntaria y tácita, mediante la dictación de dichos cuerpos legales, el daño causado por el Estado a las víctimas de la dictadura y a sus familiares expresados en tales leyes, como asimismo su obligación de reparar ese daño producido por el Estado, encontrándose éste, por ende, en la necesidad de acreditar la extinción de la obligación de reparar, alegada por la parte demandante y reconocida por el Fisco. En este sentido, la “reparación” alegada por el este último, corresponde sustantivamente a un pago del daño que se pretende reparar, esto es, un modo extinguir las obligaciones consagrado como tal en el artículo 1567 N°1 del Código Civil, correspondiendo al Fisco probar la efectividad de dicho pago, conforme a las reglas del onus probandi, con el objeto de enervar la pretensión contraria.

Por otro lado, la mentada Ley N° 19.123, conforme a su artículo 1°, creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, servicio público descentralizado, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Interior, cuyo objeto es la coordinación, ejecución y promoción de las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. En este sentido, el artículo 2 de la mencionada Ley consagra que le



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRRHR

«RIT»

Foja: 1

corresponderá especialmente a la Corporación, entre otras funciones, “Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de éstas para acceder a los beneficios contemplados en esta ley”, razón por la cual su artículo 17 estableció “una pensión mensual de reparación en beneficio de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la violencia política, que se individualizan en el Volumen Segundo del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de las que se reconozcan en tal calidad por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación”, y, a su turno, el artículo 18 del cuerpo legal en mención dispone que “Serán causantes de la pensión de reparación las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior”, debiendo considerarse también lo preceptuado en el artículo 24 del mismo texto normativo, en cuanto ordena que “La pensión de reparación será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario”.

En consecuencia, el objeto de la Ley en comento es “promover” la reparación del daño moral a las víctimas a quienes se refiere, y no repararlo derechamente, cual es la finalidad general de una indemnización de perjuicios, y por esa razón reconoce expresamente que la pensión de reparación que ella crea, es perfectamente compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce actualmente o en el futuro el respectivo beneficiario.

Por su parte, en relación con los argumentos de la parte demandada, efectivamente el Estado chileno ha efectuado distintos y variados esfuerzos de resarcimiento de perjuicios una vez concluida la dictadura, mediante diversas prestaciones establecidas en las leyes citadas por la demandada, v. gr., pensiones asistenciales y otros beneficios destinados a todos aquellos que se encuentren en la situación referida por la parte demandante, indicados al inicio de este



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

motivo, amén del establecimiento de derechos y actos simbólicos de reparación, a pesar de lo cual, tales reparaciones han tenido un carácter general, siendo destinadas a una solución reparatoria abstracta y uniforme, pero por conceptos distintos al daño moral que específicamente se ha demandado en estos autos, lo cual, por otro lado, es del todo razonable, en virtud del carácter general de tales cuerpos normativos, los cuales, al tener la jerarquía normativa de una Ley, no han considerado la situación particular y personal de cada una de las personas víctimas de apremios ilegítimos ocurridos durante el período invocado en la demanda, y tampoco han considerado la situación particular e individual del demandante en este juicio.

Por lo demás, y en dicho orden de ideas, uno de los requisitos del pago, como modo de extinguir obligaciones, consiste en la integridad del mismo, exigencia que, en concepto de este Tribunal, no se cumple en la especie, en atención a lo establecido en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de derechos Humanos, que obliga al pago de una indemnización justa a la parte lesionada, es decir a cada persona en especial, y, en comparación, los mecanismos de reparación invocados por la demandada no se ajustan a la norma internacional referida, la que, de acuerdo a lo establecido en el inciso 2º del artículo 5 de la Constitución Política de nuestra República, debe ser cumplida por el Estado de Chile, so pena de comprometer su responsabilidad internacional.

A mayor abundamiento, la Excma. Corte Suprema ha declarado, en un caso análogo, que “la legislación nacional especial que aduce el Fisco y que sólo introduce un régimen de pensiones asistenciales, no contiene incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen, ni se ha demostrado que haya sido diseñada para cubrir toda merma moral inferida a las víctimas de atentados a los derechos humanos, puesto que se trata de modalidades diferentes de compensación, lo que hace que el hecho que las asuma el Estado voluntariamente no implica la renuncia de una de las partes o la



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

prohibición para que el régimen jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que franquea la ley” (Considerando 13° de la sentencia dictada por el Máximo Tribunal el 29 de marzo de 2016, en el Rol N°2289-2015).

En virtud de lo aquí razonado, el tribunal estima que los pagos alegados por el demandado, no constituyen propiamente una reparación “integral” del daño moral sub lite, y, en consecuencia, no constituyen propiamente una indemnización de perjuicios. Por ende, en virtud de los motivos dados, corresponderá **desestimar la excepción de reparación integral** del daño, opuesta por el demandado.

**DÉCIMO:** Que, en cuanto a la **excepción de prescripción extintiva** opuesta por el demandado, éste sostuvo que en el caso sub lite, son aplicables las reglas generales de la prescripción contenidas en el Código Civil, y que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a la indemnización y la del cobro que se realiza en estos autos, ha transcurrido con creces el plazo establecido en el artículo 2332 de la mencionada ley patria, y en subsidio, para el caso que se estime que la norma anterior no es aplicable en la especie, afirmó que, en la misma hipótesis ha transcurrido en exceso el plazo de cinco años contemplado en el artículo 2515 del mismo cuerpo legal, todo ello en virtud de los fundamentos ya referidos en la parte expositiva, a la cual el Tribunal se remite por economía procesal.

Sobre el particular, y sin perjuicio de que las normas relativas a la prescripción contenidas en el Título XLII del libro IV del Código Civil son de aplicación general y encuentran su fundamento en las certezas que han de revestir las relaciones jurídicas, a juicio de esta Sentenciadora, resulta aplicable en la materias sub lite el mandato contenido en el artículo 5 inciso 2° de la Constitución Política de la República, conforme al cual “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Lo anterior ha de ser relacionado con lo preceptuado en el artículo 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por el Estado chileno, instrumento internacional que obliga a los estados parte a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, “las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

En relación con lo anterior, cobra aplicación el inciso 2° del artículo 38 de nuestra Carta Fundamental, que consagra el principio de responsabilidad del Estado por los actos de la Administración del mismo, principio que se encuentra reforzado mediante diversos textos de índole internacional, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, que consagran como principio universal el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana, y estatuyen que ninguna persona puede ser lesionada en éstos. Del mismo modo, la Convención de Ginebra (artículo 131) y la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados (artículo 27) impiden a los Estados aplicar el derecho interno con el fin de eludir responsabilidad de índole internacional, como ocurre en el caso de los derechos humanos, por lo que estas normas deben interpretarse en el sentido amplio, lo que conduce a concluir que es deber del Estado reparar el daño causado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, por tratarse dicha reparación de un derecho fundamental, el que por su propia naturaleza es imprescriptible.

A mayor abundamiento, el artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes, y, si bien la acción indemnizatoria tiene un contenido patrimonial, obedece



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

a la índole humanitaria de la protección a los derechos humanos regulados y reconocidos el instrumento internacional referido, cuya aplicación, en definitiva, prima sobre las normas internas de derecho privado, y, específicamente, sobre el artículo 2497 del Código Civil.

Según lo dispuesto en el motivo anterior, las acciones emanadas de hechos públicos y notorios constituidos por las violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos en nuestro país durante la época de la dictadura militar, de acuerdo a la normativa nacional e internacional vigente, tienen el carácter de imprescriptibles por tratarse de crímenes de lesa humanidad, al atentar contra los derechos fundamentales e inherentes a la persona humana, por lo que un acto ilícito de esa naturaleza, conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, genera tres obligaciones imprescriptibles para el Estado que ha incurrido en dicha infracción, las que se refieren a investigar las violaciones denunciadas, sancionar a los responsables y reparar íntegramente a las víctimas.

Por otro lado, cabe señalar que la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad dispone en su artículo 4 la imprescriptibilidad de la acción penal emanada de los crímenes referidos en su artículo 1, entre otros, los de lesa humanidad, situación que no exige necesariamente la exclusión de la imprescriptibilidad de la acción civil, de acuerdo a lo dispuesto en los párrafos tercero, cuarto, sexto y séptimo de la referida Convención.

Adicionalmente, nuestro Máximo Tribunal, en un caso análogo, ha declarado que “tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie- cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por el sistema internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRRHR

«RIT»

Foja: 1

con el inciso segundo del artículo 5 de la Carta Fundamental, que instaaura el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los males experimentados como consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley 19.123, reconoció en forma explícita la innegable existencia de los daños y concedió a los familiares de aquellos calificados como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período que va desde 1973 hasta 1990, regalías de carácter económico o pecuniario.

En esta línea discurren también los Roles Nos. 20.288-14, 1.424-2013, 22.652-2014, entre otros. Por ende, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual, resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad indispensables en un Estado de derecho democrático. Entonces, pretender el empleo de las disposiciones del Código Civil en la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el régimen jurídico, hoy resulta improcedente” (Considerando 7° de la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema el 29 de marzo de 2016, en el Rol N° 2289-2015).

**UNDÉCIMO:** Que, en virtud de lo expuesto en el considerando precedente, este Tribunal considera que, en el caso aquí ventilado, no resultan atingentes ni aplicables las normas legales internas que regulan la prescripción civil de la responsabilidad extracontractual del Estado, por encontrarse dichas disposiciones en contradicción con las prescripciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que protegen el derecho de las víctimas de recibir una reparación integral, el cual es un estatuto normativo internacional reconocido y ratificado por el Estado de Chile, motivo por el cual **se desestimaré la excepción de prescripción extintiva** opuesta por el demandado, fundada en el artículo 2332 del Código Civil, y también la prescripción



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

alegada en **subsidio**, fundada en el artículo 2515 del mismo cuerpo legal.

**DUODÉCIMO:** Que, abordando el **fondo de la acción indemnizatoria** por daño moral entablada, ésta encuentra su consagración positiva a partir de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 38 de la Constitución Política de la República, que prescribe que “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”, lo que constituye un principio constitucional de responsabilidad estatal recogido posteriormente en el artículo 4 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que consagra una acción general de responsabilidad por daños, al establecer que “El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”, y el artículo 44 de la misma Ley, que delimita la acción anterior al disponer que “Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio. No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal”.

De este modo, los elementos o requisitos de procedencia de la responsabilidad perseguida en autos, son: a) una acción u omisión de un órgano o agente estatal; b) que dicha acción u omisión tenga su origen en una falta de servicio; c) que dicha acción u omisión originada por falta de servicio, cause un daño o lesión en los derechos de un particular administrado; d) que entre la acción u omisión y el daño exista una relación de causa y efecto, respectivamente; a lo que se puede añadir un quinto y último requisito, a saber, que el daño no se encuentre indemnizado, toda vez que la indemnización de perjuicios



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

en nuestro ordenamiento jurídico no puede ser fuente de lucro ni configurar un enriquecimiento sin causa, dado que tiene una finalidad compensatoria o, al menos, satisfactiva, cuando se trata del daño moral, debiendo cubrir la efectiva extensión del perjuicio que se trata de resarcir.

**DECIMOTERCERO:** Que, en cuanto a la concurrencia del primer requisito de procedencia señalado en el considerando anterior, en la letra a), esto es, una acción u omisión de un órgano o agente estatal, se tendrá por acreditada la existencia de una acción ejecutada por agentes del Estado de Chile en contra del demandante, consistentes en su detención y privación de libertad y la aplicación de apremios ilegítimos y tortura en su contra, toda vez que es un hecho no controvertido, asentado en el motivo tercero, que el actor figura en la nómina de personas reconocidas como víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y además, se ha tenido por acreditado, como se anotó en el fundamento séptimo, que tiene la calidad de víctima de violaciones a sus derechos humanos cometidas por agentes del Estado de Chile durante el período histórico comprendido entre el 11 de septiembre del año 1973 y el 11 de marzo del año 1990.

Reafirma lo anterior, la circunstancia de que el demandado no ha controvertido en forma concreta la detención o detenciones invocadas en la demanda, así como tampoco los períodos en que éstas se habrían efectuado.

**DECIMOCUARTO:** Que, en cuanto a la concurrencia en el caso sub lite del segundo de los requisitos de procedencia indicados en el apartado duodécimo, esto es, que la acción de agentes del Estado señalada en el considerando anterior, haya tenido su origen en una falta de servicio, se debe tener presente que la más general de las condiciones de responsabilidad de la Administración y de las municipalidades está definida genéricamente, sin mayores



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

precisiones, como “falta de servicio” (Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, artículo 42; Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 137). El estatuto de responsabilidad de la Administración vigente en Chile se ha construido sobre la base del modelo francés de responsabilidad del Estado, donde la jurisprudencia ha concebido la falta de servicio como la infracción a un deber objetivo de conducta, que es análogo al concepto civil de culpa. Ambas nociones suponen un juicio objetivo de reproche sobre la base de un patrón de conducta: mientras en la culpa civil se compara la conducta efectiva del agente con el estándar abstracto de conducta debida en nuestras relaciones recíprocas, en la falta de servicio tal comparación se efectúa entre la gestión efectiva del servicio y un estándar legal o razonable de cumplimiento de la función pública. En la práctica, existe una gran proximidad entre estos enfoques, pues ambos atienden al comportamiento que la víctima tiene legítimamente derecho a esperar.

La falta de servicio denota el incumplimiento de un deber de servicio, incumplimiento que puede consistir en que no se preste un servicio que la Administración tenía el deber de prestar, que sea prestado tardíamente o que sea prestado en una forma defectuosa de conformidad con el estándar de servicio que el público tiene derecho a esperar. El deber de servicio resulta de la ley, y al analizar la ley que organiza un servicio o establece sus competencias y tareas, es necesario distinguir la función pública, que establece la competencia del órgano administrativo o municipal para actuar, y el deber concreto de actuación, que puede ser hecho valer ante un tribunal. Los hechos que pueden dar lugar a la responsabilidad se pueden ordenar en dos grupos: puede ocurrir que el servicio no haya sido prestado a pesar de que el órgano respectivo tenía el deber jurídico de prestarlo, o bien, que se haya incurrido en una falta con ocasión de la prestación del servicio, porque no se ha observado el estándar de servicio exigible, sea porque ha sido prestado tardía o imperfectamente. En suma, el deber de prestar un servicio surge de la interpretación de la norma



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRRHR

«RIT»

Foja: 1

legal que establece la función pública respectiva. Como en la responsabilidad por culpa, es tarea judicial la determinación del estándar o patrón de conducta que debe observar la Administración Pública y Municipal, a menos que la propia ley defina ciertas situaciones que per se den lugar a la responsabilidad, esto es, una falta de servicio infraccional (Enrique Barros Bourie, “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”, Editorial Jurídica, año 2010, página 506 y siguientes).

Así, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, en relación con lo estatuido en el inciso final del artículo 1° de la Constitución Política de la República, cuya operatividad normativa es directa para el Tribunal, es deber del Estado, entre otras cosas, “dar protección a la población” y “asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”, y, a su vez, el inciso segundo del artículo 5° de dicho Código Político consagra que “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, siendo tales derechos, entre otros, y en lo pertinente para la resolución del caso sub lite, el derecho a la integridad física y psíquica, como también el derecho a la libertad personal y la seguridad individual, establecidos, respectivamente, en los números 1° y 7° del artículo 19 de la Carta Polítca, derechos esenciales a la condición de ser humano que han sido vulnerados en la especie, en conformidad a lo establecido en los fundamentos tercero y octavo; frente a lo cual, tanto respecto de la víctima directa como también respecto de las eventuales víctimas por repercusión, la propia Constitución Política contempla en el inciso 2° de su artículo 38, una acción cuyo titular es “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

municipalidades”, quien “podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”, lo que posteriormente fue recogido en el artículo 4 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, al establecer que “El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”.

En consecuencia, de conformidad con lo concluido precedentemente, se tendrá por establecida la concurrencia del requisito en mención, esto es, en definitiva, la falta de servicio cometida por el Estado de Chile en contra del demandante, constituida por la violación a los derechos esenciales de que es titular en razón de su condición de persona humana, singularizados en el párrafo anterior.

**DECIMOQUINTO:** Que, en cuanto al tercer requisito de procedencia de la responsabilidad perseguida, señalado en el numeral duodécimo, esto es, que la acción ilícita del Estado cause un daño o lesión en los derechos de un administrado, a partir del tenor de la demanda, el perjuicio cobrado corresponde a un daño moral propio de la demandante como víctima directa, provocado en virtud del hecho ilícito asentado conforme a los motivos anteriores.

Aquí, resulta necesario aclarar que el daño moral es el que afecta los atributos o facultades morales o espirituales de la persona, noción que la mayoría de la doctrina reconoce como la forma de entender la indemnización del daño moral en Chile (RDJ, T. 39, sec. 1ª, p. 203, citado en Barrientos Zamorano, Marcelo, 2008, “Del daño moral al daño extra patrimonial: la superación del pretium doloris. Revista chilena de derecho, v.35 n.1, pp. 85-106).

En este sentido, conviene destacar, como se ha dicho en el considerando tercero, el hecho de que el Fisco de Chile no



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

controvierte ni cuestiona la calidad de víctimas con la que figura el demandante en el listado de prisioneros políticos y torturados de la nómina de personas reconocidas como víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

Luego, ha quedado acreditado, en virtud de lo expuesto en el fundamento séptimo, que a raíz de los hechos de que fue víctima el demandante, ha sufrido precisamente un menoscabo o detrimento en los atributos o facultades de índole moral o espiritual a que se hizo referencia y que constituyen en esencia el daño moral.

Cabe añadir, en todo caso, que se tiene en especial consideración, tanto para la configuración del daño como para la determinación del *quantum*, como se dirá en su oportunidad, a que asciende su indemnización, la edad y entorno familiar de la demandante al momento de los hechos descritos en la demanda, y, además, el tiempo de duración de las detenciones de que fue víctima, los apremios ilegítimos y torturas que sufrió, y las secuelas en que derivaron.

En consecuencia, por las razones señaladas, se tendrá por cumplido el requisito en análisis, relativo al daño moral o extrapatrimonial de la parte demandante.

**DECIMOSEXTO:** Que, en cuanto a la concurrencia en la especie del cuarto de los requisitos señalados en el motivo duodécimo, esto es, que entre la acción ilícita y el daño, exista una relación de causa y efecto, también se tendrá por verificado, toda vez que, a partir de lo consignado hasta aquí, se colige que el perjuicio asentado en el motivo anterior, sufrido por el actor, fue directamente causado por la actividad desplegada por el Estado de Chile a través de sus agentes, en su contra.

**DÉCIMOSEPTIMO:** Que, en cuanto al quinto y último de los requisitos indicados en el fundamento duodécimo, esto es, que el daño



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

no se encuentre indemnizado, también se tendrá por cumplido, en atención a lo razonado en el basamento noveno.

**DECIMOCTAVO:** Que, de lo que se viene razonando en los motivos duodécimo al precedente, se sigue que **concurren en este caso los requisitos de procedencia de la indemnización por daño moral reclamada**, por lo cual corresponde abordar la determinación del monto de la misma, la cual, según lo pedido en el libelo, asciende a la suma de \$300.000.000, o bien, el monto que esta sentenciadora establezca.

Al respecto, se tiene presente que, además de las dificultades de prueba del daño moral, los tribunales se enfrentan a la dificultad de traducir lo que es un concepto intangible en una realidad monetaria (Hernán Corral Talciani, “Lecciones de responsabilidad civil extracontractual”, Editorial Jurídica, año 2011, página 167).

En este sentido, y conforme al mérito de la prueba incorporada y teniendo en consideración los hechos no controvertidos por las partes, se advierte que el demandante, producto de la acción ilícita del Estado desplegada en su contra, sufrió un trauma importante y se ha visto privado de la posibilidad de tener un desarrollo vital en condiciones objetivamente adecuadas, seguras y dignas, lo cual evidentemente incide, además de la configuración del daño moral, en la determinación del monto a indemnizar por este concepto.

Por otro lado, sin perjuicio de lo decidido en el motivo undécimo, el tribunal estima que, si bien es efectivo que el Estado, a través de las leyes que se mencionan en dicho fundamento, ha realizado actos de mitigación del daño causado, con todo, dichos actos no constituyen una indemnización integral del mismo, aunque sí inciden en la evaluación del resarcimiento pedido en este juicio.

En consecuencia, por los motivos expuestos, y considerando especialmente, como se ha dicho, la edad (22 años) y entorno familiar



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

del demandante a la época en que tuvieron lugar los hechos denunciados, la extensión temporal de la privación de libertad (de 1 mes y 9 días) y los apremios ilegítimos y torturas de que fue víctima, así como las secuelas provocadas a raíz de ellos, en particular, en lo referente a la salud mental del actor y las repercusiones en su ámbito familiar, **el Tribunal regulará prudencialmente la indemnización solicitada, en la suma de \$15.000.000.- (quince millones de pesos).**

**DECIMONOVENO:** Que, **en lo relativo al reajuste**, al consistir éste en un mecanismo de actualización del capital debido como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo del dinero en el transcurso del tiempo y al haber indicado la actora una unidad de reajustabilidad concreta, esto es, el Índice de Precios al Consumidor, **se acogerá parcialmente su solicitud** en este punto, en los términos que se indicarán en lo dispositivo.

**VIGÉSIMO:** Que, **en lo tocante a los intereses**, considerando que éstos constituyen una indemnización de perjuicios por la mora, conforme a lo dispuesto en el artículo 1559 del Código Civil, **se desestimaré esta petición**, por cuanto en esta etapa procesal, la demandada no puede incurrir en mora respecto de una obligación cuya existencia se declara recién con esta fecha, en lo resolutive de este fallo.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que, en cuanto a la defensa **subsidiaria** de la demandada, referida a la **regulación de la indemnización por daño moral**, **corresponderá acogerla parcialmente**, en razón de lo dispuesto en el motivo décimo octavo, sólo en lo relativo a tener presente, para la valuación de la indemnización, los actos de mitigación ejecutados por el Estado a través de las respectivas leyes dictadas por este último –los cuales no constituyen una indemnización en sentido propio y legal-, y se desestima en todo lo demás, en virtud de lo razonado en el fundamento noveno.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que, en cuanto a las alegaciones de la demandada sobre **la improcedencia de reajustes e intereses en la forma que indica, corresponderá acogerlas parcialmente**, en razón de lo dispuesto en los motivos décimo noveno y vigésimo.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que las demás probanzas rendidas en autos, en nada alteran los fundamentos y las conclusiones de esta sentencia.

**VIGÉSIMO CUARTO:** Que, **en cuanto a las costas** solicitadas por la parte demandante, **el tribunal no accederá a esta petición**, por no haber sido el demandado totalmente vencido, según lo previsto en el artículo 144 del Código del ramo.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 19 y 38 inciso 2° de la Constitución Política; los instrumentos internacionales citados en este fallo; los artículos 1698 y siguientes, 2314 y siguientes, y 2492 y siguientes del Código Civil; las Leyes N° 19.123 y N° 19.980; y los artículos 160, 170, 253 y siguientes, 262 y siguientes, 309 y siguientes, 318 y siguientes, 327 y siguientes, 341 y siguientes, y 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se resuelve:**

I. Que **se rechaza** la excepción de reparación integral del daño, opuesta por el demandado, en virtud de lo decidido en el motivo noveno.

II. Que **se rechaza** la excepción de prescripción extintiva, opuesta por el demandado, en razón de lo asentado en el apartado undécimo.

III. Que **se acoge parcialmente** la defensa del demandado relativa a la regulación de la indemnización cobrada, según lo dispuesto en el numeral vigésimo primero.

IV. Que **se acoge parcialmente** la defensa de la demandada relativa al reajuste e intereses cobrados, conforme a lo establecido en el motivo vigésimo segundo.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR

«RIT»

Foja: 1

v. Que **se acoge parcialmente** la acción indemnizatoria entablada en autos, en conformidad con lo establecido en el basamento décimo octavo, y, en consecuencia, se condena al demandado, a pagar al actor la suma de **\$15.000.000.- (quince millones de pesos)**, por concepto de indemnización por daño moral, cantidad que deberá reajustarse de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha en que la presente sentencia se encuentre firme o ejecutoriada y la del pago efectivo.

vi. Que **se desestima** el libelo en todo lo demás.

vii. Que **no se condena** en costas al demandado, conforme a lo razonado en el fundamento vigésimo cuarto.

Regístrese, notifíquese por cédula a las partes y oportunamente archívense estos antecedentes.

**ROL C-7.849-2024.**

**DICTADA POR DOÑA SUSANA RODRÍGUEZ MUÑOZ, JUEZA.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, doce de diciembre de dos mil veinticuatro**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWSEXRXRHR